

República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar

<i>Radicación.</i>	200454089001-2022-00054-00
<i>Accionante:</i>	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP, por medio de apoderado
<i>Accionada:</i>	MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR
<i>Derecho f/tal reclamado</i>	Derecho de petición

Becerril, Cesar, martes diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022).

1. OBJETO

Valorada cada una de los elementos allegados en el trámite Constitucional procede el Despacho a dictar la sentencia que en derecho corresponda en la acción de tutela incoada por apoderado judicial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP, contra LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR representado legalmente por el Dr. Raúl Machado Luna en su condición de Alcalde, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición, con ocasión de una rogativa, la cual según los elementos anexados al libelo fue recibida en la entidad demandada el 2-02-2022 y hasta la fecha de interponer la acción constitucional no había sido resuelta.

2. HECHOS

Manifiesta la accionante dentro de los supuestos facticos lo siguiente:

" 1.- Como es un hecho notorio, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP es la Empresa que presta el servicio de distribución de energía eléctrica en los Departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 Municipios de Magdalena. Así mismo, es la Empresa que suministra dicho servicio a la mayoría de los usuarios en el Departamento de Cesar.

2.- Teniendo en cuenta la importancia que reviste el pago del servicio de energía para el usuario y para la Empresa, puesto que ello contribuye al cumplimiento de los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera que gobierna la prestación de este servicio, resulta de gran interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP conocer si en el marco fiscal de mediano plazo que consagra la Ley 819 de 2013 se previó el pago del servicio de energía y si se realizaron las respectivas apropiaciones presupuestales por parte de las distintas entidades territoriales. Esto de acuerdo también con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994 y 49 de la Ley 143 de 1994.

3.- En vista de lo anterior, el día 04 de febrero de 2022 se le presentó a la accionada un escrito de petición solicitando la entrega de información y adicionalmente varios documentos, entre los cuales figuran el (i) Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia fiscal del año 2022, (ii) el Cronograma de pagos de las obligaciones vencidas a favor de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP y del pago de las obligaciones corrientes y futuras por el servicio público de energía,

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2022-00054-00
Accionante	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Accionado	Alcaldía Del Municipio De Becerril Cesar
Decisión	Se niega - Hecho superado.

y (iii) la copia auténtica del Certificado de Apropiación Presupuestal para la vigencia fiscal del año 2022 donde consten los estimativos del servicio público domiciliario de energía eléctrica de las dependencias oficiales y de alumbrado público para el año 2022. (iv) Copia del PAC Plan Anual Mensualizado de Caja, donde se puede observar el cronograma de pagos de la vigencia correspondiente donde se especifique el cronograma de pagos para el servicio público de energía y (v) Indicar la situación de fondos del presupuesto.

4.- Como se puede observar, la información solicitada resulta totalmente pertinente frente al servicio de energía que presta CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP y, además, es del total conocimiento de la accionada, razón por la cual no existen motivos para desconocerla.

5.- El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece en el artículo 14 que las autoridades administrativas cuentan por regla general con quince (15) días hábiles para responder las peticiones que se les formulen. Pero en el caso de la solicitud de documentos, como la que hizo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP a la accionada, el término para responder es de diez (10) días. Adicionalmente, si la respuesta no se hace en este lapso opera el silencio administrativo positivo, dado que la norma expresamente dispone que se entenderá, para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se deben entregar dentro de los tres (3) días siguientes.

6.- Muy a pesar de lo anterior, mi representada no ha recibido respuesta a la petición y tampoco se nos ha justificado su demora."

3. PRETENSIONES

El accionante solicita:

"PRIMERA: Solicito respetuosamente se conceda el amparo del derecho fundamental de petición violado por la accionada.

SEGUNDA: En consecuencia, se ordene a la entidad accionada a emanar respuesta de fondo a la petición impetrada dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, en el sentido de entregar las copias de los documentos solicitados, tal como lo exige el numeral 1 del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

4. PRUEBAS

- Copia del derecho de petición de fecha 04-02-2022
- Copia de escritura pública No. 0218
- Copia de documento denominado "Solicitud inclusión deudas en Marco Fiscal Mediano Plazo e inclusión de los rubros necesarios para pago del consumo corriente en la Apropiación Presupuestal para la vigencia 2022, por concepto del servicio de energía eléctrica".

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2022-00054-00
Accionante	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Accionado	Alcaldía Del Municipio De Becerril Cesar
Decisión	Se niega - Hecho superado.

5. ACTUACIONES PROCESALES

La acción de tutela fue radicada en el correo institucional del Juzgado de acuerdo a los lineamientos trazados por el CSJ para evitar la propagación del COVID 19, así las cosas, pasa al Despacho con nota secretarial, donde la suscrita realiza el estudio de admisibilidad y se decide por medio de auto de fecha jueves veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022) AVOCA conocimiento, el dicha decisión ordena la notificación de las partes para que ellas se pronuncien sobre los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela en el término perentorio de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación.

6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

6.1. LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, hace uso al derecho a la réplica por medio de apoderado judicial, quien solicita sean negadas las pretensiones por darse la figura del hecho superado, dado que la Secretaría de Hacienda ofreció respuesta a las peticiones. Anexan a dicha respuesta la comunicación que le enviaron y la prueba de envío del correo electrónico jblanco@andienergia.com.co, de fecha 4 de mayo de 2022, con lo cual estiman han cumplido con lo rogado por la empresa accionante.

7. CONSIDERACIONES

Es de anotar que el artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela *como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual* con la cual se busca la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

- El derecho fundamental de petición¹.

Del contenido del artículo 23 Superior, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho de petición tiene el carácter de derecho fundamental, por ello el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que éste resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, Aprobado Acta No. 407, Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013).

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2022-00054-00
Accionante	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Accionado	Alcaldía Del Municipio De Becerril Cesar
Decisión	Se niega - Hecho superado.

En cuanto a su alcance, el derecho de petición no sólo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la facultad para exigir de la autoridad a quien le ha sido formulada una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración.

En ese sentido, la respuesta que se dé a las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Debe ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; (ii) Resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, y (iii) Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, pues la notificación de la respuesta al interesado forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, porque de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. Bajo el anterior planteamiento, corresponde determinar si en el presente caso, Aún se continúa vulnerando el derecho de petición al accionante.

- Caso concreto

Se tiene que efectivamente la empresa accionante el 4 de febrero de 2022 radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de este municipio, en el cual solicitaba una información sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia fiscal del año 2022; el Cronograma de pagos de las obligaciones vencidas a favor de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP y del pago de las obligaciones corrientes y futuras por el servicio público de energía, y copia auténtica del Certificado de Apropiación Presupuestal para la vigencia fiscal del año 2022 entre otros documentos relacionados; información que hasta la fecha de interponer la acción preferente NO había sido entregada.

Descendiendo en el caso concreto se tiene que la petición efectivamente fue radicada, dado que no solo se aportaron los documentos que lo acreditan, sino que quien hizo uso del derecho a la réplica lo acepta en su respuesta, por tanto, lo que se analizará es el termino dentro del cual se ofreció respuesta.

El Juzgado entra a determinar si existe vulneración al derecho fundamental de petición, para ello y en aras de zanjar la discusión verifica los anexos allegados con la respuesta ofrecida por la Alcaldía, en lo cual se constata que la respuesta fue enviada no solo al Despacho sino al correo de la actora, de lo anterior se

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2022-00054-00
Accionante	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Accionado	Alcaldía Del Municipio De Becerril Cesar
Decisión	Se niega - Hecho superado.

concluye que las pretensiones fueron absueltas, así las cosas, se puede concluir que la puesta en peligro o vulneración el derecho fundamental de petición ya no existe.

Por todo lo puesto de presente en los párrafos precedentes se puede colegir sin incertidumbre que se está frente a lo que la Jurisprudencia ha denominado como “*hecho superado*”, por tanto, hay carencia de objeto.

Así las cosas, se hace inexcusable por su importancia pero además por guardar estrecha relación con el tema traer a colación la postura de la H. Corte Constitucional sobre el tema, quien ha reiterado que el objeto de la acción de tutela es el de asegurar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, mediante mandatos judiciales inmediatos para que el responsable de la agresión o amenaza de aquéllos haga o deje de hacer algo, según haya incurrido en omisión o en acción contraria a la Constitución.

Además, ha resaltado que dicho objeto es ilusorio cuando en el desarrollo mismo de los acontecimientos llevados a conocimiento del juzgador, hacen que desaparezcan los motivos de perturbación o peligro para los derechos fundamentales materia de protección constitucional y que, por ende, ya no se requiera el apremio de la orden judicial, como es el caso que ocupa la atención, de acuerdo a lo resaltado de manera detallada en los párrafos precedentes.

En doctrina Constitucional este fenómeno se conoce como hecho superado y se describe de la siguiente manera:

“El propósito de la tutela, como lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, es que el juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos. No obstante, hay casos en que el juez constitucional conoce de acciones de tutela, en los que para ese momento ya se ha reivindicado el derecho vulnerado o violado, o ha desaparecido la causa de tal afectación. Este fenómeno ha sido catalogado por la jurisprudencia como hecho superado, en el sentido de que han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron el ejercicio de la acción²”.

Pero bien, este no ha sido la única decisión sobre el tema, por lo que se trae otra que se considera pertinente que de segura sirven como sustento jurídico.

“Al desaparecer los supuestos de hecho en virtud de las cuales se formuló la demanda se presenta la figura de hecho superado.

² Sentencia T-149/2006 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2022-00054-00
Accionante	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Accionado	Alcaldía Del Municipio De Becerril Cesar
Decisión	Se niega - Hecho superado.

Ante un hecho superado, en donde la pretensión que fundamenta la solicitud de amparo constitucional ya está satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez. Y ello es entendible pues ya no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer o tomar determinación alguna³”.

Frente a este panorama y siendo más que evidente que la puesta en peligro o transgresión por la cual se acudió ante un Juez constitucional ha desaparecido no existe orden que impartir, por tanto, será denegada la súplica por carencia de objeto o hecho superado al haberse ofrecido una respuesta de fondo a la solicitud presentada, lo cual se envió al correo electrónico jblanco@andienerqia.com.co el 4 de mayo de 2022, siendo las 9:14 horas.

En mérito de lo anterior el Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril - Cesar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR por carencia de objeto el amparo constitucional deprecado por JORGE RIVERO CUADRO, en su condición de Apoderado General de la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Por Secretaría notificar la decisión a las partes conforme a los lineamientos del decreto 2591 de 1991, haciéndoles saber que respecto de la misma procede el recurso de impugnación

TERCERO: En caso de ser impugnada la presente decisión en los términos de ley, se ordena que por Secretaría de manera inmediata se envíe al Centro de Servicios de los Juzgados del Circuito de Valledupar para el reparto respectivo, atendido los protocolos de Bioseguridad establecidos por el CSJ.

CUARTO: Si no es impugnado el presente fallo, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ELAINE ONATE FUENTES
JUEZA

Se suscribe con firma escaneada, por salubridad pública
(Art. 11, decreto 491 de 2020)

³ Sentencia T-488/2005 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.